

REPÚBLICA DE COLOMBIA



RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO CATORCE DE FAMILIA DE ORALIDAD DE SANTIAGO DE CALI

SENTENCIA No. 302

Santiago de Cali, diecinueve (19) de diciembre de dos mil veintitrés (2023).

I. ASUNTO.

Procede el Despacho a emitir sentencia, dentro del proceso de **ADJUDICACIÓN JUDICIAL DE APOYOS**, promovido por **CLARA INES GONZALEZ SANCHEZ** en favor de **CARMEN ELENA SANCHEZ PAZ**.

II. ANTECEDENTES Y DEL TRÁMITE PROCESAL.

1. **DEMANDA.** Como sustentos fácticos para deprecar la adjudicación de apoyos, se resaltan como relevantes los siguientes:

- CARMEN ELENA SANCHEZ PAZ, tiene los siguientes padecimientos: “*discapacidad auditiva, diabetes, hidrocefalia*” enfermedades en virtud de las cuales fue perdiendo la capacidad de marcha, empezó a perder la memoria, esquizofrenia y demencia senil.
- Actualmente, ante la imposibilidad de su hija de cuidarla pues labora todo el día, CARMEN ELENA SANCHEZ PAZ se encuentra internada en el hogar Amigos del Anciano.
- No existe otro familiar que pueda hacerse cargo de CARMEN ELENA SANCHEZ PAZ, pues su grupo familiar está compuesto únicamente por esta, su hija CLARA INES GONZALEZ SANCHEZ y su nieta ANGELA MARIA VILLADA GONZALEZ.
- CARMEN ELENA SANCHEZ PAZ es propietaria de 2 inmuebles identificados con los folios de matrículas inmobiliarias Nos: 370-698997 y 370-56664 y dos cuentas de ahorros que fueron adquiridas con el fin de que le fueran consignados los dineros de su pensión, en las entidades bancarias: Banco Popular No. 230604020404 y Davivienda No. 16090401858

PRETENSIÓN. De la subsanación de la demanda se desprende que los actos jurídicos respecto de los cuales se demanda apoyo son los que enseguida se evocan en su literalidad:

PRIMERA: Decretar la necesidad de adjudicación de apoyo judicial para la realización de actos jurídicos y administrativos a favor de la señora **CARMEN ELENA SANCHEZ PAZ** mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía N° 14.606.336.

SEGUNDA: Como consecuencia de lo anterior, se designe a su hija, la señora **CLARA INES GONZALEZ SANCHEZ**, identificada con la cedula de ciudadanía No. 66.824.527 de Cali, como apoyo judicial de la señora **CARMEN ELENA SANCHEZ PAZ**, con el fin que la represente en la realización de actos jurídicos y administrativos, los cuales consisten en el cobro, apertura, cancelación y todo lo relacionado con el manejo y administración de las cuentas de ahorro de pensión del banco popular # 230604020404 y Davivienda #16090401858, así mismo el manejo y la administración de los bienes inmuebles a su nombre; un apartamento en la urbanización la Arboleda con matrícula inmobiliaria # 370-698997 y de una casa en el barrio las Ceibas con matrícula inmobiliaria # 370-56664 en la ciudad de Cali; de

igual manera, asistencia para la comprensión de dichos actos jurídicos y sus consecuencias, asistencia en la manifestación de la voluntad y preferencias personales.

TERCERA: expedir las copias auténticas necesarias con el fin de realizar los trámites pertinentes

2. Admitida la demanda, se ordenó entre otras cosas, designar como curador ad-litem a MARTA TRIVIÑO VARGAS para que la representara en las siguientes actuaciones; y la notificación al Ministerio Público.

Trabada la litis, la curadora contestó la demanda y en términos que importan al plenario, se limitó a indicar que no se opone a las pretensiones de la demanda, manifestando que, por el contrario, se desprende de la demanda que a CARMEN ELENA SANCHEZ PAZ se le debe designar como apoyo a su hija CLARA INES GONZALEZ SANCHEZ.

III. CONSIDERACIONES.

i. Preliminarmente corresponde a esta Célula Judicial decir, que, en esta ocasión, deberá examinarse el probatorio recaudado al tenor de las disposiciones de ley que disciplinan la materia y conforme a las reglas de la sana crítica, responder los siguientes problemas jurídicos:

Determinar si existe mérito para que a CARMEN ELENA SANCHEZ PAZ se le asigne apoyo judicial para ser representada y se le garantice el goce efectivo de sus derechos y plena protección legal.

En caso de ser afirmativa la respuesta al anterior interrogante, establecer en qué actos se requiere dicha representación y qué persona es la idónea para ser designada apoyo.

ii. Para resolver el asunto que nos convoca, en primer lugar, se hará un recuento de los antecedentes jurídicos relacionados con el tema de adjudicación de apoyos; en segundo momento, se abordará los elementos probatorios; y, por último, se analizará el caso concreto.

ii.i. DE LOS ANTECEDENTES JURÍDICOS.

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006 y aprobada en Colombia mediante la Ley 1346 de 2009 determinó las garantías fundamentales que deben brindar todos los Estados vinculados para la protección de los derechos de las personas en situación de discapacidad y es así como en su artículo 3º se señalaron los principios rectores de la Convención, que se sintetizan de la forma que subsiguientemente se evocan:

- i. *El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas;*
- ii. *La no discriminación*
- iii. *La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad*
- iv. *El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas*
- v. *La igualdad de oportunidades*
- vi. *La accesibilidad*
- vii. *La igualdad entre el hombre y la mujer*
- viii. *El respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad.*

En el artículo 12 ibidem estableció para todas las personas en situación de discapacidad el reconocimiento de su capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida.

Todo este volcamiento jurídico ha tenido efectos en nuestro país, verbigracia, la Ley 1618 de 2013 “(...) Por medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad (...)” la que entre otros asuntos, dispuso en el artículo 21: “(...) **El Ministerio de Justicia y del Derecho, o quien haga sus veces, en alianza con el Ministerio Público y las comisarías de familia y el ICBF, deberán proponer e implementar ajustes y reformas al sistema de interdicción judicial de manera que se desarrolle un sistema que favorezca el ejercicio de la capacidad jurídica y la toma de decisiones con apoyo de las personas con discapacidad, conforme al artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas (...)**”.

Y sin lugar a dudas, la Ley 1996 de 2019 “(...) POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECE EL RÉGIMEN PARA EL EJERCICIO DE LA CAPACIDAD LEGAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD MAYORES DE EDAD (...)” introdujo significativos cambios en el ordenamiento jurídico colombiano, siendo el más relevante, sin duda, la eliminación de la figura de la interdicción, y considerando que todos gozamos de capacidad legal, incluso los individuos con alguna limitación o capacidad diferente. La Corte Constitucional en sentencia de la misma data de promulgación de la ley, enunció las novísimas modificaciones de la

normativa, circunscribiéndolos a que: "(...) i) (...) las personas mayores de edad en condición de discapacidad gozan de la misma capacidad jurídica que las demás; ii) un sistema de asistencia a las personas con diversidad funcional que busca reforzar y ejecutar sus decisiones y cumplir su voluntad; iii) un sistema de ajustes razonables, apoyos y directivas anticipadas que deben cumplir con los criterios de necesidad, correspondencia, duración e imparcialidad, de conformidad con el régimen de salvaguardias; iv) eliminó del ordenamiento jurídico colombiano la interdicción y todas las demás formas de suplantación de la voluntad de las personas con discapacidad; y v) creó un régimen de transición para las personas que actualmente adelantan un proceso de interdicción y para las personas declaradas interdictas o inhabilitadas. (...)"¹

La ley mencionada en vigor desde agosto de 2019 permite inferir que a partir de ese momento ningún individuo mayor de edad podrá perder su capacidad legal de ejercicio, así padezca de alguna discapacidad, lo que se encuentra a tono con la obligación internacional del Estado Colombiano, lo cual tiene su fuente en la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, que se encargó de replicar el compromiso internacional de los Estados partes en garantizar la adopción de las medidas de carácter legislativo, social, educativo, laboral o de cualquier otra índole, para descartar completamente cualquier forma de discriminación, la que fue adoptada por el Estado patrio mediante la Ley 762 de 2002.

Del tema que nos convoca, la Corte Constitucional, en sentencia C-022 de 2021 que declaró exequible la referida Ley, sostuvo lo que enseguida se trae a colación por su pertinencia:

"(...)30. La Ley 1996 de 2019 derogó expresamente los artículos 1° al 48, 50 al 52, 55, 64 y 90 de la Ley 1306 de 2009. Es decir, todo lo referente a la guarda e interdicción de las personas entendidas como incapaces absolutos o relativos por presentar alguna discapacidad mental. Dentro de esta nueva normativa, los cambios más relevantes son los siguientes: (i) elimina del ordenamiento civil la incapacidad legal absoluta por discapacidad mental, dejando solo a los impúberes como sujetos incapaces absolutos; (ii) deroga el régimen de guardas e interdicción para las personas en condiciones de discapacidad mental, cognitiva o intelectual; (iii) presume la capacidad de goce y ejercicio para todas las personas con discapacidad; (iv) establece dos mecanismos que facilitan a las personas con discapacidad manifestar su voluntad y preferencias en el momento de tomar decisión con efectos jurídicos: (a) acuerdos de apoyos y (b) adjudicación judicial de apoyos; y (v) regula las directivas anticipadas, como una herramienta para las personas mayores de edad en las que se manifiesta la voluntad de actos jurídicos con antelación a los mismos.

31. Los antecedentes legislativos de esta Ley [65] demuestran que este nuevo régimen de apoyos es el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el Estado establecidas en el artículo 12 de la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, la interpretación realizada por el Comité del tratado a través de la Observación General No. 1 (2014) y la recomendación realizada concretamente a Colombia, mediante informe del año 2016 del mismo organismo internacional.[66] En el contexto del proyecto de ley y su exposición de motivos, se puso de presente que la capacidad de ejercicio ha sido históricamente restringida a la población con discapacidad y que "la herencia de instituciones del derecho romano clásico, como la figura de interdicción, se han configurado como impedimentos para el reconocimiento del derecho al ejercicio de su capacidad jurídica, pues se desarrollan desde una perspectiva médico-rehabilitador, que solo se limita a señalar las carencias y lo necesario desde el ámbito médico para reconocerles como personas "normales".[67]

32. En virtud del estándar internacional mencionado y la Ley Estatutaria 1618, el legislador asumió la obligación de reemplazar el actual régimen de sustitución de la voluntad (la interdicción), por un sistema de toma de decisiones con apoyos, que fue finalmente materializado con la Ley 1996 de 2019. En palabras del legislador:(...) Este proyecto permite, con las medidas que implementa, que la persona con discapacidad pueda tomar decisiones y controle su propia vida y que la participación de terceros sea facilitando y apoyando la toma de decisiones, y no sustituyéndola. En este sentido, los dos mecanismos de realización de apoyos, así como la herramienta de las directivas anticipadas, permiten que la toma de decisiones con apoyos sea aplicable a personas que requieren distintos niveles de apoyos".[68]"(...)"

A la par, de conformidad con lo previsto en el artículo 9º de la referida norma, la persona en situación de discapacidad, mayor de edad, tiene derecho a contar con un sistema de

¹ Sentencia T-525/19

apoyos para la realización de actos jurídicos, los cuales pueden ser establecidos a través de dos mecanismos:

- a. Mediante **acuerdo** entre la persona titular del acto jurídico y la persona que prestará el apoyo en su celebración.
- b. Por **decisión judicial**, a través de un proceso de jurisdicción voluntaria *-cuando es promovido por la persona titular del acto jurídico-*; o verbal sumario *-si se tramita por una persona distinta al titular del acto jurídico-* denominado *“proceso de adjudicación judicial de apoyos”*, a través del cual se designan apoyos formales a una persona con discapacidad, mayor de edad, para el ejercicio de su capacidad legal frente a uno o varios actos jurídicos concretos (art. 32).

Ahora bien, el proceso de adjudicación de apoyos para la toma de decisiones promovido por persona **distinta** al titular del acto jurídico se encuentra regulado por el art. 38 de la Ley 1996 de 2019, que a su vez modificó el canon 396 del Código General del Proceso, y tiene como finalidad la designación de una persona de apoyo para las personas en situación de discapacidad en la toma de decisiones que se ajusten a sus necesidades y preserven su autonomía y dignidad para el ejercicio de la capacidad legal, para lo cual deben seguirse las reglas previstas en la referida disposición; así: *“[e]n el marco de este proceso, se realizará una valoración de apoyos con el fin de acreditar el nivel y grado de apoyos que la persona requiere para tomar decisiones. Al interponerse la demanda se debe demostrar (a) “que la persona titular del acto jurídico se encuentra absolutamente imposibilitada para manifestar su voluntad y preferencias por cualquier medio, modo y formato de comunicación posible”, y (b) “que la persona con discapacidad se encuentre imposibilitada de ejercer su capacidad legal y esto conlleve a la vulneración o amenaza de sus derechos por parte de un tercero”.*” (Sentencia C-025 de 2021, con ponencia de la Dra. CRISTINA PARDO SCHLESINGER).

El artículo 3° de la Ley 1996 de 2019, en sus numerales 4 y 5 precisa los apoyos como *“(…) tipos de asistencia que se prestan a la persona con discapacidad para facilitar el ejercicio de su capacidad legal. Esto puede incluir la asistencia en la comunicación, la asistencia para la comprensión de actos jurídicos y sus consecuencias, y la asistencia en la manifestación de la voluntad y preferencias personales”* y más específicamente define los apoyos formales como *“(…) aquellos apoyos reconocidos por la presente ley, que han sido formalizados por alguno de los procedimientos contemplados en la legislación nacional, por medio de los cuales se facilita y garantiza el proceso de toma de decisiones o el reconocimiento de una voluntad expresada de manera anticipada, por parte del titular del acto jurídico determinado”.*

El proceso de adjudicación a diferencia de los antes llamados procesos de interdicción, se refiere exclusivamente a aquellos apoyos formales con consecuencias jurídicas, esto es, aquellos que facilitan la realización de actos jurídicos por parte de la persona con discapacidad, para quienes la Ley presume la capacidad legal, como fue ampliamente indicado. Es así como el precepto 48 de la Ley en comento consagra lo relacionado con la representación de la persona titular del acto jurídico, en los siguientes términos:

“(…) ARTÍCULO 48. REPRESENTACIÓN DE LA PERSONA TITULAR DEL ACTO. La persona de apoyo representará a la persona titular del acto solo en aquellos casos en donde exista un mandato expreso de la persona titular para efectuar uno o varios actos jurídicos en su nombre y representación.

En los casos en que no haya este mandato expreso y se hayan adjudicado apoyos por vía judicial, la persona de apoyo deberá solicitar autorización del juez para actuar en representación de la persona titular del acto, siempre que se cumpla con los siguientes requisitos:

- 1. Que el titular del acto se encuentre absolutamente imposibilitado para manifestar su voluntad y preferencias por cualquier medio, modo y formato de comunicación posible; y,*
- 2. Que la persona de apoyo demuestre que el acto jurídico a celebrar refleja la mejor interpretación de la voluntad y preferencias de la persona titular del acto. (...)"*

ii.ii. **DE LOS ELEMENTOS PROBATORIOS.**

De cara a demostrar el supuesto fáctico de la norma, se arrimaron al proceso las pruebas que a continuación se señalarán por acompañarse a los ritualismos establecidos en las disposiciones normativas vigentes y por aportar elementos cardinales para zanjar el litigio:

- a. Registros civiles de nacimiento de CLARA INES GONZALEZ SANCHEZ y ANGELA MARIA VILLADA GONZALEZ, documentos que acreditan la condición de hija y nieta respectivamente de CARMEN ELENA SANCHEZ PAZ.
- b. Historia clínica y record clínico, que da cuenta de los siguientes diagnósticos de CARMEN ELENA SANCHEZ PAZ .

Enfermedad Actual

ASISTE PACIENTE EN COMPAÑIA DE CUIDADORA (LINA GONZALEZ TEL 3235083194), ANTECEDNTE DE DIABETES MELLITUS TIPO 2 , DISLIPIDEMIA, SD CONVULSIVO, ESQUIZOFRENIA, HIDROCEFALIA, DISCAPACIDAD AUDITIVA, NO CONTROLA ESFINTERES- ESTA EN CONTROLES CON PSIQUIATRIA Y NEUROLOGIA.

- c. Registro civil de defunción de JUAN CARLOS GONZALEZ SANCHEZ que da cuenta del fallecimiento del descendiente de CARMEN ELENA SANCHEZ PAZ .
- d. Declaraciones extra juicio rendidas ante la Notaría Dieciséis del Círculo de Cali, por CLAUDIA JIMENA VARGAS y LINA MARCELA GONZALEZ VAGAS *-cuidadoras-*, CARLOS ARTURO VILLADA VALENCIA *-cónyuge CLARA INES GONZALEZ-* y ANGELA MARIA VILLADA GONZALEZ- *nieta CARMEN ELENA SANCHEZ PAZ-* en las que, dan cuenta de que CLARA INES GONZALEZ es la única *"familiar y persona encargada de todos los asuntos personales y/ legales"* de CARMEN ELENA SANCHEZ PAZ.
- e. Informe valoración de apoyos realizado por la doctora NATHALY RESTREPO ORDOÑEZ de la Personería de Santiago de Cali, en el que manifestó que CARMEN ELENA SANCHEZ PAZ requiere como apoyos los siguientes:

- Facilitar la comprensión de los actos jurídicos y sus consecuencias por parte de la persona con discapacidad.
- Facilitar la manifestación de la voluntad y las preferencias por parte de la persona con discapacidad.
- Representar a la persona en determinados actos cuando la persona no pueda manifestar su voluntad.
- Interpretar la voluntad y las preferencias cuando la persona no pueda manifestar su voluntad.

Se manifestó además en dicho informe que, gracias a la realización de ajustes razonables, se pudo entablar comunicación por lenguaje de señas, con CARMEN ELENA SANCHEZ PAZ quien manifestó, estar de acuerdo con que su hija CLARA ELENA se encargue de los trámites y representación que involucren su bienestar

f. Informe técnico practicado por la asistente social adscrita al Despacho, cuyo concepto fue el siguiente:

5. CONCEPTO SOCIAL

Conforme a los hallazgos anteriores se concluye que la señora CARMEN ELENA SANCHEZ PAZ de 71 años. Tiene sus derechos fundamentales garantizados por el cuidado de su única hija CLARA INES GONZALEZ SANCHEZ quien administra la pensión y los bienes inmuebles de propiedad de su madre pero que no duda en aportar con sus propios pecunios los emolumentos que se requieran para sostener sus condiciones adecuadas en el hogar geriátrico donde su madre recibe los cuidados idóneos para la complejidad del cuadro de salud a nivel mental que de manera degenerativa ha disminuido sus capacidades como mujer activa, alegre y trabajadora que fue hace varios años.

Gracias a la valoración de apoyos realizada por la personería Distrital de Cali, se realizaron los ajustes razonables que permitieron conocer que la señora PAZ SANCHEZ presenta capacidad para reconocer a su hija como la persona idónea para continuar administrando los bienes y pensión que posee y que permite que cuente con un sitio de acogida en su vejez con dificultades a nivel de su salud mental y física, que permite conservar su calidad de vida mientras sus únicos familiares continúan realizando sus labores productivas y permanecen pendientes de su bienestar.

Así las cosas, con los hallazgos del presente informe social y la valoración de apoyos aportada a este plenario, se puede concluir que CARMEN ELENA SANCHEZ PAZ requiere apoyo a nivel personal y legal de tal forma que se continúen garantizando sus derechos fundamentales por parte de su única red familiar encarnada en su hija, yerno y nieta. Pero, que es la señora CLARA INES GONZALEZ SANCHEZ, en su calidad de hija y con dominio del lenguaje de señas que le permite mantener comunicación con su madre, quien se observa como la persona idónea para servir de persona de apoyo FORMAL para realizar las diligencias legales que sean requeridas por las entidades a las que se requiera acudir para mantener o mejorar su bienestar integral como persona con discapacidad totalmente dependiente.

ii.iii. DEL CASO CONCRETO.

Fortalecida en los precedentes medios de prueba, proveniente de personal idóneo, como son las personas cercanas al desarrollo de la vida de la aquí involucrada por su claro vínculo de consanguinidad y otros por representar personal profesional capacitado, el Despacho estima que quedó plenamente acreditado las afecciones que padece CARMEN ELENA, doliente de varios diagnósticos, entre otros, “discapacidad auditiva, diabetes, hidrocefalia, esquizofrenia y demencia senil”, lo que, según las experticias obrantes y que no fueron derruidas o controvertidas, permiten colegir que es una persona totalmente dependiente, por lo que requiere apoyo que le consienta avanzar en los actos que se demanda en la vida cotidiana de las personas.

Según el dicho de la profesional adscrita al Juzgado, la señora CARMEN ELENA SANCHEZ PAZ, requiere apoyo a nivel personal y legal de tal forma que se garanticen sus derechos fundamentales.

A su vez manifiesto que CLARA INES GONZALEZ SANCHEZ es la persona idónea para servir de apoyo de CARMEN ELENA entre otras, por el dominio del lenguaje de señas que le permite mantener comunicación con ella.

Pese a que la valoración de apoyos obrante en el plenario, se dio cuenta de la necesidad de apoyos en sendos aspectos, lo cierto es que, en la demanda sólo se deprecó la designación de los mismos en relación con los ámbitos que inmediatamente se develan:

COMUNICACIÓN.

- Acompañamiento para asegurar comprensión y expresión con terceros.
- Asistencia para la manifestación de la voluntad y preferencias personales

PATRIMONIAL Y DE MANEJO DEL DINERO.

- Apoyo para administración de los ingresos consistente en mesada pensional
- Administración de los inmuebles identificados con las M I. Nos. 370-698997 y 370-56664

De acuerdo con las probanzas válidas y en oportunidad arrimadas al plenario, se observa que la condición de salud de CARMEN ELENA SANCHEZ PAZ, compromete su funcionalidad y le resta capacidad resolutive y de autodeterminación, lo que le impide ejercer por sí misma y hacer exigibles sus derechos. Está probado, además, que la condición de la mencionada es irreversible, situación de salud constitutiva de obstáculo para dar a conocer, en puridad y claridad, su voluntad, haciendo imperativa la designación de persona de apoyo que privilegie y garantice el goce efectivo de sus derechos.

Así, conforme a las disposiciones del artículo 38 de la Ley 1996 de 2019, se procederá a designar como apoyo judicial de CARMEN ELENA SANCHEZ PAZ a su descendiente CLARA INES GONZALEZ SANCHEZ, por ser la persona más apta para fungir como tal, según lo recaudado en el proceso.

Finalmente, teniendo en cuenta que la norma en mención impone la obligación de determinar el alcance y duración de la designación de apoyos, se establece que, dadas las condiciones de discapacidad médicamente certificadas de CARMEN ELENA SANCHEZ PAZ y la valoración de apoyos, la designación tendrá como propósito los ámbitos enantes relacionados. Así mismo, conforme lo previsto en el art. 48 de la Ley 1996 de 2019, los

apoyos serán para interpretar la voluntad y las preferencias de la titular del acto jurídico y para representar la persona en determinados actos, los cuales serán descritos en la parte resolutive de esta providencia. Estos apoyos se destinarán por el tiempo máximo que permite el artículo 18 de la Ley 1996 de 2019², esto es, **cinco (5) años**.

IV. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, **EL JUZGADO CATORCE DE FAMILIA DE ORALIDAD DE SANTIAGO DE CALI**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE.

PRIMERO: DECLARAR que se hace indispensable la designación de persona de APOYO JUDICIAL en favor de CARMEN ELENA SANCHEZ PAZ, identificada con C.C No. 31.230.755 de Cali, para garantizar el goce efectivo de sus derechos y plena protección legal.

SEGUNDO. DECLARAR que CARMEN ELENA SANCHEZ PAZ identificada con C.C No. 31.230.755 de Cali, **REQUIERE APOYO PARA LOS SIGUIENTES ACTOS:**

COMUNICACIÓN.

- Acompañamiento para asegurar comprensión y expresión con terceros.
- Asistencia para la manifestación de la voluntad y preferencias personales

PATRIMONIAL Y DE MANEJO DEL DINERO.

- Apoyo para administración de los ingresos consistente en mesada pensional
- Administración de los inmuebles identificados con las M I. Nos. 370-698997 y 370-56664

TERCERO. DESIGNAR como APOYO JUDICIAL de CARMEN ELENA SANCHEZ PAZ identificada con C.C No. 31.230.755 de Cali a CLARA INES GONZALEZ SANCHEZ, identificada con C.C. No. 66.824.527 de Cali, en calidad de hija para los actos jurídicos y apoyos relacionados en el numeral **SEGUNDO** de esta providencia.

CUARTO. ORDENAR a CLARA INES GONZALEZ SANCHEZ tomar posesión en el cargo, en el término de **CINCO (5) DÍAS**, cumpliendo así los fines previstos en el artículo 38 de la Ley 1996 de 2019, una vez ejecutoriada la presente providencia

² ARTÍCULO 18. DURACIÓN DE LOS ACUERDOS DE APOYO. Ningún acuerdo de apoyo puede extenderse por un período superior a cinco (5) años, pasados los cuales se deberá agotar de nuevo alguno de los procedimientos previstos en la presente ley.

QUINTO. DURACIÓN. De conformidad con el artículo 18 de la ley 1996 de 2019 y teniendo en cuenta las pruebas recaudadas en este caso, los apoyos aquí adjudicados tendrán una duración de **cinco (5) años**.

SEXTO. ORDENAR INSCRIBIR esta providencia en el **LIBRO DE VARIOS** del registro del estado civil de las personas y en el registro civil de nacimiento de CARMEN ELENA SANCHEZ PAZ. Lo anterior, de cara a lo dispuesto en el artículo 5º del Decreto 1260 de 1970 y 51 de la Ley 1996 de 2019, para lo cual se remitirá esta providencia a la entidad o dependencia que corresponda.

PARÁGRAFO PRIMERO. Estas comunicaciones serán gestionadas por personal de secretaría o el dispuesto para ello por la necesidad del servicio, **una vez quede ejecutoriada esta providencia**. Las comunicaciones también se harán extensivas a los abogados y partes para lo que corresponda en el deber de colaboración que les asiste para materializar las ordenes contenidas en esta providencia.

SÉPTIMO. CONFORME lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley 1996 de 2019³, cualquier actuación judicial relacionada con personas a quienes se les haya adjudicado apoyos será de competencia de este juzgado.

OCTAVO. Por secretaría **ELABORAR** un archivo de expedientes inactivos sobre las personas a quienes se les haya adjudicado apoyos en la toma de decisiones del cual se pueden retomar las diligencias, cuando estas se requieran.

En el evento de requerirse el envío al archivo general, este expediente se conservará en una sección especial que permita su desarchivo a requerimiento del juzgado.

NOVENO. Superados dos (2) años sin movimiento alguno de este proceso con posterioridad a esta sentencia, **REMITIR** al archivo general.

DÉCIMO. Al término de cada año desde la ejecutoria de la presente sentencia, SANDRA LILIANA TORRES DONCEL deberá efectuar un balance en el cual se exhibirá al Juzgado:

³ **ARTÍCULO 43. UNIDAD DE ACTUACIONES Y EXPEDIENTES.** Cualquier actuación judicial relacionada con personas a quienes se les haya adjudicado apoyos será de competencia del Juez que haya conocido del proceso de adjudicación de apoyos.

Cada despacho contará con un archivo de expedientes inactivos sobre las personas a quienes se les haya adjudicado apoyos en la toma de decisiones del cual se pueden retomar las diligencias, cuando estas se requieran. En el evento de requerirse el envío al archivo general, estos expedientes se conservarán en una sección especial que permita su desarchivo a requerimiento del juzgado.

PARÁGRAFO. El expediente de quienes hayan terminado la adjudicación de apoyos, que no haya tenido movimiento en un lapso superior a dos (2) años, podrá ser remitido al archivo general. Un nuevo proceso de adjudicación de apoyos con posterioridad hará necesario abrir un nuevo expediente.

También será causa de archivo general la muerte de la persona.

1. El tipo de apoyo que prestó en los actos jurídicos en los cuales tuvo injerencia.
2. Las razones que motivaron la forma en que prestó el apoyo, con especial énfasis en cómo estas representaban la voluntad y preferencias de la persona.
3. La persistencia de una relación de confianza entre la persona de apoyo y el titular del acto jurídico.

PARÁGRAFO PRIMERO. Para lo anterior se realizará la oportuna programación de lo cual se informará a las partes.

DÉCIMO PRIMERO. SUMINISTRAR para los efectos pertinentes, vía correo electrónico el expediente digital previa solicitud de los interesados. **Lo anterior, deberá cumplirse por cuenta de la secretaría del Juzgado.**

DÉCIMO SEGUNDO. HACER las anotaciones del caso en los libros radicadores y Sistema JUSTICIA SIGLO XXI. **En esta última herramienta deberá consignarse lo cardinal de la parte resolutive de la providencia.**

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

SAIDA BEATRIZ DE LUQUE FIGUEROA

Jueza.

Firmado Por:
Saida Beatriz De Luque Figueroa
Juez
Juzgado De Circuito
De 014 Familia
Cali - Valle Del Cauca

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **e89b09519c3820d6363f56ec74c416094e6912af62da0ff2351b58855e9a6107**

Documento generado en 19/12/2023 03:49:59 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>